

26 ENE 1985

Organizaciones religiosas

Dan alojamiento a refugiados

WASHINGTON (AFP) — El Movimiento del Santuario, lanzado hace unos tres años por una iglesia de Tucson, Estado de Arizona, en favor de los habitantes de América Central, es actualmente el blanco de vigorosas críticas de las autoridades norteamericanas en medio de un amplio debate en la opinión pública.

El movimiento fue lanzado en marzo de 1982 por la Iglesia Presbiteriana de Tucson, con la idea de proteger a los salvadoreños que huyeron debido a la guerra civil que azota a ese país.

Posteriormente, se extendió a los refugiados guatemaltecos y, en la actualidad, unas 180 iglesias de todo Estados Unidos y de todas las confesiones —protestantes, católicas y judías— apoyan el movimiento.

Los miembros del movimiento ayudan a los potenciales refugiados a salir de su país y atravesar la frontera entre Estados Unidos y México. A continuación, los encuentran un refugio temporal, y a menudo los albergan en las mismas iglesias para protegerlos de las autoridades norteamericanas de inmigración.

Después de una investigación de diez meses, realizada por medio de cuatro "soplones" infiltrados en las iglesias, la policía detuvo el 14 de enero pasado a dieciséis personas, entre ellas al pastor de la iglesia de Tucson, a dos sacerdotes católicos y a tres religiosas. La semana siguiente, sesenta extranjeros fueron detenidos por complicidad.

Al mismo tiempo, esta semana se inició el proceso de Jack Elder, acusada de haber trasladado en su automóvil a tres refugiados salvadoreños ilegales, por lo cual puede ser condenada a 15 años de prisión y a una multa de 6.000 dólares.

Estos ataques contra el Movimiento del Santuario desataron un debate público en Estados Unidos.

Al ayudar a los refugiados ilegales, ¿acaso las iglesias no hacen otra cosa que aplicar los principios de fraternidad?

¿O por el contrario, ¿acaso el deber religioso y la conciencia no deben someterse a las leyes estatales?

Para los miembros del Movimiento del Santuario y sus abogados, parece establecido que una veintena de salvadoreños que fueron detenidos y devueltos a su país fueron encontrados posteriormente muertos.

De acuerdo con esto, los salvadoreños que entran ilegalmente

a Estados Unidos podrían reclamar el estatuto de refugiados políticos, según la ley de 1980, que amplió esa calidad a los ciudadanos de todos los países y no sólo a los de los países comunistas.

Ese criterio es rechazado enérgicamente por los servicios norteamericanos de inmigración, y numerosos antagonistas a esa influencia confirman que la primera preocupación de esos "refugiados" consiste en encontrar trabajo, y que en consecuencia no están calificados para obtener el derecho de asilo en Estados Unidos.

Acusando de "ingentos" a los religiosos, ese sector de la opinión pública norteamericana afirma que el problema de los "refugiados económicos" ya se produjo en el pasado, pues Estados Unidos atrae como un imán a habitantes de todos los países de la región.

El problema se plantea con particular agudeza en el caso del "boat people" de Haití, que desean escapar tanto al régimen dictatorial del presidente Jean Claude Duvalier como a la miseria.

Los miembros del Movimiento del Santuario discutieron todos esos puntos en un simposio celebrado esta semana en Tucson, del cual participaron más de 1.000 personas, o sea seis veces más que la cantidad prevista antes del ataque de las autoridades.

Por el momento, al menos, parece que el ataque de las autoridades no los ha disuadido de continuar transportando y abrigando a los refugiados de América Central. "Continuaremos con más entusiasmo que nunca", afirmó uno de ellos.

El interés de numerosos ciudadanos norteamericanos por la situación de los centroamericanos se manifiesta no solo en la asistencia que prestan a los refugiados provenientes de esa región, sino además en la presencia de numerosos estadounidenses en Nicaragua, donde contribuyen a la recolección del café, junto con cosechadores voluntarios provenientes de numerosos países. La tarea de todos ellos es particularmente riesgosa puesto que los contrarrevolucionarios que combaten contra el gobierno de Managua los atacan frecuentemente. La muerte de alguno de ellos podría precipitar un deterioro aún mayor en las relaciones entre el gobierno de Ronald Reagan y el de Daniel Ortega.